

Pablo Casado

Desayuno Informativo

Europa Press

Madrid, 1 de junio de 2021

Señoras y Señores,

Hace más de cuarenta años los españoles hicimos una Transición ejemplar. Un proceso respaldado masivamente por todos los partidos políticos, que orillaron sus diferencias por un mismo anhelo de democracia y libertad. En esa voluntad compartida estuvo la izquierda democrática, igual que el nacionalismo, relevante entonces, pero tan alejado del actual.

OFICINA DE INFORMACIÓN

En palabras de Julián Marías, la Transición permitió devolver España a los españoles, y sentó las bases de una nueva etapa de progreso nacional que ha sido la mejor de toda nuestra historia.

Entonces, los españoles supimos resolver muy bien los tres dilemas que se nos plantearon: entre la ruptura y la reforma, elegimos la reforma; entre el privilegio y la igualdad, elegimos la igualdad; entre el enfrentamiento civil y el consenso, elegimos el consenso.

Entonces nos guio un espíritu sincero de concordia, que es el compromiso de evitar poner sobre la mesa lo que se sabe que es inaceptable para los demás, pensando en hacer posible la convivencia de todos los que quieren convivir.

Queríamos reconciliación, progreso y futuro. Y lo logramos.

La concordia nace de la moderación, que es la voluntad de anteponer la convivencia de todos al programa de uno mismo. Eso no significa renunciar a las ideas propias, significa que cuando el partidismo daña la convivencia, hay que anteponer siempre la convivencia.

Y esto es exactamente lo contrario de lo que hacen los nacionalistas y lamentablemente lo contrario de lo que hacen Pedro Sánchez y su Gobierno.

Fomentan intencionadamente las fracturas, las divisiones, los radicalismos y las discordias. Desprecian los esfuerzos por integrar y unir alrededor de grandes proyectos nacionales en los que muchos puedan reconocerse y por los que todos quieran trabajar.

Y cuando eso se hace en mitad de la crisis sanitaria, económica y social que estamos sufriendo, más que una irresponsabilidad es una deserción contra un país que necesita a sus instituciones y a sus políticos centrados y trabajando por el bien común.

Eso es lo que ha sucedido estos días con el anuncio de los indultos a los condenados por sedición, por el golpe al Estado que sentenció el Tribunal Supremo en un proceso ejemplar.

Corrompen la figura del indulto y el papel institucional de la presidencia del Gobierno para pagar un precio político con el patrimonio de todos a beneficio del propio Sánchez; contra la ley, contra su propia palabra y a favor de quienes solo han tratado de someter a la sociedad a su chantaje.

Llamar concordia a esa oscura transacción es mucho más que una trampa del lenguaje y un desprecio a la inteligencia y a la madurez de los españoles; es, simplemente, la manipulación grotesca de uno de los valores más nobles de nuestra política para ponerlo al servicio de los propósitos más bajos.

La democracia es un sistema en el que votamos para hacer leyes que protegen nuestros derechos. No se puede votar para quebrar la ley y para dejar a nadie sin sus derechos.

Celebrar un referéndum contra la ley es un delito grave y peligroso, porque su propósito no es privarnos de un derecho, sino privarnos de todos. Y pretender minimizar su gravedad, como paso previo para borrar el delito, retrata a un Gobierno terminal, rehén de aquellos que quieren destruir España.

El acto de votar, igual que los medicamentos, sana la convivencia cuando se produce conforme a lo prescrito, pero puede causar daños severos cuando se prescinde de ese requisito.

Hay suficientes ejemplos históricos dramáticos en la memoria de todos que no voy a recordar.

No existe un derecho a decidir por los demás, sino el derecho a que no decidan por uno mismo, porque el acuerdo de todos sólo se puede cambiar por el acuerdo de todos.

Este derecho es el que la Justicia defiende para los españoles, que íbamos a ser privados de él a la fuerza y contra la ley. Y principalmente lo defiende para los catalanes, que el 6 de diciembre de 1978 participaron y votaron masivamente la Constitución, por encima de la media nacional.

El poder Judicial nace de la Constitución, como el poder Ejecutivo y el Legislativo. Nace de la voluntad de los catalanes expresada democráticamente, igual que nace de la voluntad del resto de los españoles.

Eso es lo que se quiere romper al romper con la Constitución. Y si se rompe con ella, se rompe también con Europa.

Apostar contra España es apostar contra Cataluña y contra Europa, y por tanto es apostar a perder. Siempre será una derrota con muy graves consecuencias para quienes la sufran. Y es bueno que sea así. Sin eso no puede haber esperanza de que la convivencia se pueda restaurar y fortalecer allí donde ha sido dañada.

Si los separatistas no abandonan sus amenazas, estamos abocados a que la historia se repita una y otra vez con el mismo resultado, diga lo que diga Pedro Sánchez y haga lo que haga este Partido Socialista. Ni él ni su partido están por encima de la ley, aunque sea ya evidente que les gustaría estarlo. No puede haber un resultado distinto, no existe margen alguno para ello.

La democracia española va a prevalecer. Siempre y sobre cualquiera que la desafíe, prevalecerá.

¿En qué momento la socialdemocracia adoptó el principio de que la ley estorba a la concordia y a la convivencia?

¿Desde cuándo es revancha, venganza y castigo el Estado de Derecho y la Justicia?

Ni la Constitución, ni la Monarquía, ni Europa, ni las leyes, ni la oposición son el problema de España. El problema es un Gobierno entregado a una alianza sostenida solo por la voluntad de destruir la España constitucional.

Hay un Gobierno que lo agrava todo y que no resuelve nada; que exige sumisión para una equivocada agenda económica europea que no negocia ni explica, mientras ejecuta una agenda radical de la mano de sus socios, caracterizados, por cierto, de un hondo antieuropeísmo.

Un Gobierno que ha decidido a dañar lo que sea con tal de sobrevivir un día más en La Moncloa. Que nos manda callar bajo amenaza de retirarnos la credencial de demócratas, mientras el egoísmo de los peores destruye ante nuestros ojos la obra generosa de los mejores.

Pues bien, no vamos a asistir en silencio a este proceso destituyente contra la soberanía y contra las instituciones de los españoles.

Defenderemos la Constitución, el Poder Judicial y la monarquía parlamentaria que representa la continuidad histórica de la Nación y nuestra voluntad soberana de seguir existiendo como democracia moderna y europea.

La Justicia emana del pueblo español y se administra en nombre del Rey. Y, solo por esto, estos falsos indultos, como pago político, no deberían producirse jamás.

La declaración de Pedralbes, con la ignominia del relator incluida, sigue encima de la mesa que Sánchez ha aceptado retomar para negociar la autodeterminación y la amnistía, un desprecio más a nuestra democracia.

Por eso, no aceptamos la demonización de la sociedad española que se manifiesta pacíficamente contra quien abandona la Constitución que ha prometido defender.

No hay imagen más perversa que la subasta de la unidad nacional para amarrar una legislatura estéril.

No hay instantánea más siniestra que el pacto de los herederos de ETA con el partido de 14 de sus víctimas, a cambio de unos presupuestos que son pura ficción.

No hay fotografía más indeseable que el abrazo con quien alaba dictaduras donde se tortura y se asesina a disidentes políticos.

Sánchez se comprometió solemnemente y en público en la campaña electoral, a no pactar con independentistas, a tipificar el referéndum ilegal, traer a Puigdemont ante la Justicia y acabar con el adoctrinamiento educativo y la propaganda mediática pública. Pero lo que ha hecho es proponer autoindultos ilegales según el Supremo para seguir en el poder, y modificar el delito de sedición que aprobó el PSOE en la reforma del Código Penal de 1995 y que por cierto existe en todos los países de nuestro entorno.

Un auténtico fraude a todos los españoles que no debe quedar impune. Y ya digo desde hoy, que revertiremos esta agenda absurda en cuanto lleguemos al Gobierno y nosotros sí tipificaremos el referéndum ilegal, nosotros sí cualificaremos el delito de sedición y nosotros si acabaremos con el adoctrinamiento educativo y con la propaganda pública que divide a la sociedad catalana.

Conviene dejar claro de una vez por todas que fueron el Pacto del Tinell y el Estatut inconstitucional promovido por Rodríguez Zapatero los que iniciaron la hegemonía independentista.

Y fue el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP con el apoyo de los españoles lo que permitió evitar que los referendos unilaterales fueran legales y que el máximo órgano jurisdiccional fuera un Tribunal Superior de Justicia elegido por el Parlament, instalado en la pura ilegalidad.

Es decir, los delitos del 1-0 no se hubieran podido perseguir porque no habrían sido delito. Quizá es eso lo que pretendían.

Porque el referéndum de secesión habría sido legal, y el golpe al Estado del 1-O no podría haberse juzgado por el Supremo.

Hicimos lo correcto. Y -nosotros sí legalmente- lo volvemos y lo volveremos a hacer, cuando se ataca la Constitución, la Justicia y la Nación.

Pero todos los que firmamos por la unidad nacional y la igualdad ante la ley, y todos los que saldremos a la calle en unos días, tendremos una cita mucho más importante en las urnas. Ese tiempo intermedio tiene una tarea esencial: que los españoles pasemos del acto cívico de manifestarnos juntos al acto político de votar unidos a la única alternativa a Sánchez, que es el PP.

Señoras y señores,

El proceso destituyente que impulsa el Gobierno no sólo cambia la verdadera historia de la Transición como abrazo y reconciliación, sino que apunta de lleno al modelo territorial, a la definición nacional de España y a los pilares esenciales de la arquitectura constitucional.

Quiero garantizar que el Partido Popular asegurará que los españoles, todos los españoles, seguirán conservando intacto su derecho a decidir sobre cualquier cambio de su Constitución. Sólo el Partido Popular puede ser alternativa electoral real a Pedro Sánchez y ofrecer esta garantía.

Porque no debemos engañarnos: los falsos indultos no son el final de un proceso, son el inicio. El inicio de un nuevo empuje radical destinado a hacer creer que la Constitución era en realidad una mera disposición transitoria pendiente de ser desarrollada a gusto del nacionalismo y la izquierda radical.

De ahí su afán revisionista con la memoria histórica, y su excéntrica agenda prospectiva a 30 años vista.

Nos llaman inmovilistas por decir que los cimientos de un país no son de goma y que las palabras escritas en las leyes no significan lo que quiera el capricho del Gobierno.

El objetivo de esta turbia ingeniería política, es crear un proceso que convalide actuaciones contra la ley, y genere un movimiento de ocupación de las instituciones, como se ha visto con la Fiscalía, el CNI, los reguladores, las empresas públicas y el intento de asaltar el Consejo General del Poder Judicial.

El plan de Sánchez es la neutralización del PP como primer paso hacia la mutación constitucional, a través de un cambio ilegítimo y al margen del procedimiento previsto.

Esa es, lamentablemente, la naturaleza política del PSOE actual. Irreconocible, estoy seguro, para la inmensa mayoría de votantes tradicionales del socialismo español. Este es el plan del que nos piden que seamos parte, y no lo vamos a ser.

Servir a España hoy significa para el Partido Popular reafirmarse como única alternativa a un socialismo entregado al nacionalismo y a los populismos radicales.

Nuestra misión como partido no es formar bloques de partidos sino formar mayorías de electores que hagan posible el cambio en las próximas elecciones generales.

Señoras y señores,

Los esfuerzos del PSOE y su propaganda mediática se concentraban primero en negar los pactos con los independentistas; luego en blanquearlos; y ahora nos dicen que no son el precio político que pagamos todos a favor de Sánchez, sino el precio personal que el muy valiente Sánchez paga de su propio bolsillo para beneficiarnos a todos.

Hay quien ya confunde el relato con el esperpento, y pretende convertir España en un gran Callejón del Gato, con sus espejos deformantes de la realidad.

Seamos claros frente a tanta distorsión:

No vamos a dar regalos a quien amenaza con destruir la Nación española, y mucho menos se los vamos a dar porque amenace. Quieren hacer creer

que aceptar chantajes es de valientes, pero a nadie se le escapa lo que es en realidad, una cobardía y una traición.

Sánchez no puede pretender resolver sus propios problemas convirtiéndolos en problemas de Estado, ni lograr su continuidad en el poder a costa de la continuidad de la Nación española.

Ni el PSOE, ni sus socios van a establecer el alcance del artículo 2 de la Constitución española: eso es patrimonio de los españoles. Y ninguna ocupación institucional, que revertiremos en cuanto gobernemos, podrá arrebatarnos ese derecho de todos. Devolveremos a la sociedad española la neutralidad institucional degradada por este Gobierno.

Tenemos al secretario general del Partido Socialista negociando la soberanía y la hacienda con defensores del terrorismo, delincuentes y golpistas, mientras una crisis sanitaria sin precedente arrasa las vidas, las familias, los trabajos y el futuro de millones de españoles.

Este desvarío, que ha puesto a nuestro país en la peor situación imaginable, debe terminar. España debe despertar. Y ya lo está haciendo.

Señoras y señores,

La Constitución es muralla para quien la ataca y camino para quien la respeta.

El verdadero camino de concordia y convivencia para la Cataluña española y europea es el contrario al que se impone estos días.

Los españoles, también los catalanes, somos personas que declaramos y vivimos con naturalidad identidades compartidas, no excluyentes. Esto es lo que debemos volver a poner en el centro de nuestra vida pública, la realidad de nuestro pluralismo y el auténtico respeto por él y por las leyes.

Quienes tienen un problema con el pluralismo y con la democracia son los nacionalistas. Ellos rechazan de lo que Cataluña y España verdaderamente son.

Restaurar la convivencia en Cataluña pasa por renunciar a las políticas de extranjerización promovidas hasta ahora. Pasa por aceptar la realidad de que ser catalán no equivale a ser nacionalista. Pasa por el compromiso de defender en su integridad todos los derechos de ciudadanía de todos los catalanes.

Partiendo de ahí, hay camino para un nuevo protagonismo y una nueva participación solidaria de Cataluña en la definición del mejor futuro para España y para Europa.

Una Cataluña liberada de la parálisis y la regresión a la que la somete el nacionalismo con el aplauso del Gobierno. Que ejerza un liderazgo claro, que la devuelva al centro de los debates y de los acuerdos constructivos, y que la aleje del oscuro rincón de la historia en la que el nacionalismo trata de situarla, fuera de la Europa de la que depende no solo su marco jurídico amplio sino cualquier posibilidad de supervivencia económica.

Llevar a Cataluña fuera de Europa, que es una de las consecuencias automáticas de una secesión, carece de la mínima justificación vinculada a los derechos o al bienestar de los catalanes.

Los españoles necesitamos que los catalanes -todos, como son en realidad y como cada uno quiere ser-, ejerzan todos sus derechos junto a todos los demás, que formen parte protagonista de un proyecto de libertad y de progreso, sin servidumbre a ningún pasado, real o imaginario.

Debemos facilitar el camino de retorno a la realidad jurídica, histórica y económica, no recompensar a quien lo bloquea.

España nunca alcanzará su mejor versión mientras no sepamos poner de nuevo en marcha el motor político, económico, cívico y cultural que Cataluña puede y debe ser. Ni hay España sin Cataluña, ni hay Cataluña sin España.

Acabo ya. Este año se cumple el centenario de la España invertebrada, donde Ortega alerta de la desarticulación nacional por culpa de regionalismos y separatismos, en un proceso de desintegración desde la periferia al centro por la crisis de proyecto de vida en común y por la inacción de la clase dirigente.

Pero ahora eso no va a pasar porque el Partido Popular quiere representar la España real, no la del 2050; la de los españoles de carne y hueso, no de la propaganda y el humo de Moncloa.

La España de los balcones vuelve a bajar a las plazas y pronto lo hará a las urnas. Y volverá a elegir concordia y Constitución, que han hecho posibles los mejores años de nuestra historia.

Quiero mandar un mensaje claro a todos los españoles, en especial a aquellos que viven en Cataluña: que estén tranquilos, porque el Estado de Derecho, la igualdad y la libertad prevalecerán frente a todo.

Nuestra misión es dejar un país mejor a nuestros hijos y la garantía de que puedan aspirar a vivir mejor que sus padres, lejos de las hipotecas egoístas que el Gobierno pone sobre sus hombros.

Creo, sinceramente, que en ese camino podemos encontrarnos para convivir en libertad y con derechos. Ese es el camino de la convivencia y de la concordia. Y ahí nos encontrarán siempre, sin perder nunca la esperanza.

Muchas gracias.